

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	789
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2022-00303-00
MEDIO DE CONTROL:	ACCION POPULAR
ACCIONANTE:	MATEO VIVEROS TORRES
ACCIONADAS:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA, SECRETARÍA DISTRITAL DE MEDIO AMBIENTE, SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN, EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ y CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
ASUNTO:	Remisión demanda por competencia funcional

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Correspondería pronunciarse sobre la admisión de la demanda, si no se hubiere advertido que este juzgado carece de competencia funcional para tramitarla.

En efecto, el señor Mateo Viveros Torres, en causa propia, promueve acción popular contra la Alcaldía Municipal de Mosquera, Secretaría Distrital de Medio Ambiente, Secretaría Distrital de Planeación, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, con el fin de que se amparen los derechos colectivos al ambiente sano, patrimonio público, acceso al espacio público, equilibrio ecológico, manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales y desarrollo sostenible y salubridad pública, presuntamente vulnerados por las entidades demandadas, al incumplir los objetivos y obligaciones contempladas en la Resolución No. 03 del 2015, por la cual se aprueba el Plan de Manejo Ambiental del Parque Ecológico Principal del Meandro del Say.

En cuanto a las reglas de competencia para conocer de la acción popular, el numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021, prevé que los procesos relativos a la protección de derechos e intereses colectivos dirigida contra autoridades del orden nacional será conocida en primera instancia por el respectivo tribunal administrativo; y el artículo 16 de la Ley 472 de 1998 consagraba que en segunda instancia la competencia corresponderá a la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo.

De otra parte, el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 establece la naturaleza jurídica de las Corporaciones Autónomas Regionales, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 23. NATURALEZA JURÍDICA. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Exceptúase del régimen jurídico aplicable por esta Ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, creada por el artículo 331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley”.

A su turno, la Corte Constitucional, en sentencia C-407 del 2019, sobre la naturaleza jurídica de las CAR, señaló lo siguiente:

“Finalmente, la Sala reitera el precedente fijado por esta Corte respecto de la autonomía de las CAR, a saber:

(i) Si bien es cierto el artículo 150-7 superior reconoce autonomía a las corporaciones autónomas regionales, tal autonomía no es absoluta; debe entenderse en el marco del Estado unitario previsto en el artículo 1° de la Carta y está sujeta a configuración legislativa, en tanto la propia Carta no delimita sus alcances y contenido.

(ii) Las Corporaciones Autónomas Regionales CAR son órganos constitucionales de orden nacional sui generis, pues reúnen varias de las características de los órganos descentralizados por servicios, específicamente en materia de administración de los recursos naturales y planificación y promoción del desarrollo regional con criterios de sustentabilidad ambiental, pero (a) no están sujetas a control de tutela ni a otros mecanismos estrictos de control administrativo que permitan a la autoridad central revocar o variar sus decisiones -lo que no se opone a los controles jurisdiccionales-, y (b) no están adscritas a ningún ministerio” (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, teniendo en cuenta que uno de los sujetos demandados es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, entidad del orden nacional, se concluye que este juzgado carece de competencia para conocer de la presente acción popular y, por tal razón, se dispondrá la remisión de la demanda y de sus anexos al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera (Reparto).

En mérito de lo expuesto, se dispone:

PRIMERO: REMÍTASE la demanda y sus anexos, por competencia funcional, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, para que, salvo mejor criterio, sea asignada entre los magistrados de esa colegiatura.

SEGUNDO: EFECTUÉNSE las anotaciones a que haya lugar por la salida del expediente.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

AHSC

Firmado Por:
Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **02e24f28dca55550266e9ad17a8e3ad70cf122d5be205bcaffb4e8fb7955ae34**
Documento generado en 24/08/2022 04:52:12 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>